

LAS PRIORIDADES DEL MINISTRO DE VIVIENDA:

LA IRRUPCIÓN DE PODUJE y su fórmula de “pisar callos” que le trae réditos en los sondeos

Mientras su tono propio lo empuja entre los ministros mejor evaluados, el arquitecto insiste en que sus decisiones no responden a una disputa cultural, sino a la urgencia social. A la vez, prepara un proyecto de ley que hace más estrictas las condiciones para paralizar obras por hallazgos arqueológicos, al exigir que su destino esté resuelto de antemano. | **RENÉ OLIVARES**



El arquitecto afirma que en los primeros tres meses se verán avances tangibles en su cartera: demoliciones, entregas de terrenos y mejoramiento de entornos degradados.

“Me voy a parar, para que me vean”, le dice Iván Poduje a un grupo de tres comités de vivienda de Pedro Aguirre Cerda, con quienes conversa sobre sus opciones de conseguir un terreno para construir sus anheladas viviendas.

Y claro, su metro 95 de estatura obliga a las vecinas a mirarlo hacia arriba. Pero su altura es apenas una de las cosas poco habituales que tiene Poduje como ministro. Porque no venía de hacer carrera en un partido, ni de acumular años en la administración pública. Llegó, más bien, desde otro lugar: el del urbanista mediático, el columnista filoso, el panelista de discusión televisiva, el consultor que hizo del diagnóstico duro sobre la ciudad una identidad reconocible.

Su desembarco en el Minvu supone para él una prueba de traducción: si ese personaje público, moldeado en la crítica, puede convertirse en una autoridad capaz de administrar, priorizar, negociar y ejecutar. El arquitecto Poduje entró al ministerio con un problema que, a la vez, es su principal capital político, que es que llega con un estilo ya conocido: frontal, impaciente con la burocracia, propenso al conflicto y poco inclinado a la diplomacia del aparato público.

En sus cuatro semanas de ministro ya ha tenido altercados con pobladores que se han

viralizado; y otros varios que no han tenido la misma difusión. A eso se suma que cuando su nombramiento se confirmó, de inmediato se recordó su historial de *rounds* con parlamentarios de izquierda y de derecha, entre ellos el episodio más recordado con Javier Macaya en “Sin Filtros”. La pregunta que dejó instalada su arribo fue obvia: cómo un ministro que ridiculizó o descalificó a varios de los actores con los que ahora deberá tratar en el Congreso y fuera de él piensa convertir esa energía en gobernabilidad.

Pero en el mes a cargo del Minvu, se ha transformado en uno de los ministros con agenda más marcada del gabinete, y ese mismo estilo parece estar reduciéndole políticamente. En un gabinete que pasó zozobras durante su primer mes de instalación, Poduje logró afirmarse como una de las figuras más cotizadas y visibles del equipo de José Antonio Kast. La encuesta Cadem del 25 de marzo lo ubicó entre los ministros mejor evaluados, con 55% de aprobación, junto a Claudio Alvarado (Interior) y solo por debajo de May Chomali (Salud) y Francisco Pérez Mackenna (Cancillería). Y la medición de Critería difundida por T13 lo mostró, además, entre los más conocidos del gabinete, con 56% de reconocimiento ciudadano.

Todo eso mientras la aprobación presi-

dencial había caído a 47%, diez puntos menos que al inicio de la administración. Ese contraste ayuda a explicar por qué Poduje importa políticamente: mientras el Gobierno busca afirmarse, él ya muestra algo que varios ministros todavía no consiguen: una identidad nítida, reconocible y con rendimiento propio.

Ese dato no es accesorio. Es, probablemente, una de las principales razones para detenerse hoy en Poduje.

Sobre su visión de la gestión, explica que pretende “primero, un Minvu cercano a la gente, en terreno”, dice. Luego, sigue: un ministerio “que resuelve”, que “ataca la burocracia como el principal flagelo que tenemos hoy día”, porque las familias “esperan ocho, nueve, diez, doce años” y “cada mes para ellos es una tortura”. Después viene la palabra que repite como si quisiera dejarla instalada como lema de gestión: “Urgencia, urgencia, urgencia”. Y enseguida agrega otra definición: un ministerio que “prioriza las acciones donde se necesita, los recursos donde se necesita”, porque “tenemos poca caja hoy día” y por eso hay que destinar los recursos “a los pavimentos que nos faltan, a las casas que nos faltan, a los colectores que nos faltan, a las áreas verdes, a las zonas carenciadas”.

Explica también cómo pretende hacer que el Estado se mueva más rápido. “El único problema para hacer las cosas rápido es

que hay que tener un buen equipo que haga seguimiento”, dice. Luego detalla una especie de método de gestión que mezcla monitoreo, presión jerárquica y conocimiento experto del sistema: “Tienes que hacer las reuniones *al tiro* cuando hay un problema”; “tienes que buscar todos los artículos y todos los vericuetos que la ley te permite

“No es un tema cultural, es un tema de prioridades, de prioridades sociales”, dice Poduje sobre paralizar la expropiación de Villa Baviera o las ciclovías del eje Alameda-Providencia.

para ir más rápido”; “tienes que pisar callos”; “tienes que presionar”. Incluso cuenta que ha debido llamar personalmente a sanitarias y eléctricas para acelerar procesos, aplicando “mecha corta cuando corresponde”. Así traduce su estilo en práctica ministerial. Poduje pretende una conducción

de presión permanente, seguimiento cerrado y uso intensivo de los espacios que permite la ley para apurar decisiones.

NUEVAS EXIGENCIAS PARA RESTOS ARQUEOLÓGICOS

Ese método tiene una traducción legislativa muy concreta. Dice que enviará prontamente un proyecto de ley para exigir que el Consejo de Monumentos Nacionales, “antes de paralizarnos una obra”, disponga de “un lugar acreditado del museo donde va a ser expuesto el hallazgo que va a ser retirado, acreditado por un museo, firmado”. Solo con ese certificado, afirma, aceptará detener la obra y realizar “todas las exploraciones que nos exijan”. Cuando se le objeta que en la práctica eso no suele ocurrir porque los museos no tienen expuestas todas sus colecciones, responde que no está exigiendo exhibición, sino algo más básico: que los museos digan “si tienen espacio o no”. Y luego lleva la discusión a otro plano: considera “absolutamente inmoral” paralizar un hospital o un proyecto de vivienda para retirar hallazgos que terminarán “en una bodega”, porque esa parálisis implica que familias sigan “allegadas”, “viviendo hacinadas” o pagando costos millonarios de espera.

Así, el ministro discute el patrimonio subordiándolo explícitamente a una noción de costo social de la espera. Para sus partidarios, ahí hay una forma de sentido común. Para sus críticos, una puerta abierta a dificultar el resguardo patrimonial.

El segundo nudo donde Poduje quiere intervenir legislativamente es en cambiar la relación entre crecimiento urbano y empresas sanitarias. Su diagnóstico es que hoy existe un “límite sanitario” que, en la práctica, manda más que el “límite urbano” que definen el Minvu y los municipios. “Tengo otro límite que es más chico, que se llama el límite sanitario, que es el que realmente define hasta dónde crece la ciudad”, explica. La idea del proyecto es que “el límite sanitario coincida con el límite urbano” y que la infraestructura necesaria no se cargue íntegramente a un solo proyecto, sino que pueda “prorratarse en el plan de inversión completo de la compañía”. Detrás de esa definición técnica hay una apuesta política bastante clara: quitarles a las sanitarias poder de veto territorial sobre la política habitacional y sobre la expansión de las ciudades.

Una tercera iniciativa legal será para regular los loteos irregulares.

NIEGA LA “DISPUTA CULTURAL”

La misma lógica recorre sus definiciones sobre prioridades presupuestarias. Cuando se le plantea que algunas de sus decisiones —como frenar la expropiación de Colonia Dignidad o no insistir en la ciclovía del eje Alameda-Providencia— pueden leerse como parte de una “batalla cultural”, Poduje rechaza de plano ese marco. “No, no, no es ninguna disputa cultural”, responde. Y enseguida traduce la discusión a la caja fiscal y a lo que llama “prioridades sociales”. Si tiene que gastar “40 mil millones de pesos” en expropiar para un memorial, dice, prefiere destinar esos recursos “a pavimentos, a viviendas, a parque”. Si una ciclovía cuesta “\$8 mil millones”, sostiene que esa misma plata puede servir para los colectores de alcantarillado “para que las familias no se ahoguen en fecas”. “No es un tema cultural, es un tema de prioridades, de prioridades sociales”, insiste. “Tengo que destinar los recursos donde generen mayor beneficio social”.

Su respuesta obliga a matizar cualquier lectura demasiado lineal. Porque es verdad que varias de esas decisiones han sido leídas, fuera del ministerio, como señales cargadas de contenido ideológico. La reversión de la expropiación de Colonia Dignidad abrió una disputa política y jurídica inmediata; la paralización del último tramo de la ciclovía de Nueva Alameda desató críticas desde el urbanismo y la academia; y la suspensión de ciertos proyectos emblemáticos del gobierno anterior ha sido vista por algunos como una forma de selección cultural desde la derecha.

Donde Poduje sí asume con claridad una disposición confrontacional es en la defensa de su propio estilo. “Yo no me puedo dar el gusto ahora de ser polemista”, dice, marcando una distancia respecto de su comportamiento anterior. Pero la frase no implica una renuncia total a la fricción. Explica que ha recompuesto relaciones con autoridades con las que antes tuvo problemas —menciona a Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar, entre otros— y que hoy su obligación es trabajar con todos “en pos de los vecinos”. Sin embargo, agrega una salvedad crucial: cuando alguien le exija una política pública que “implique desviar el foco de las prioridades sociales”, ahí sí saldrá a decir que “eso no es urgente ni prioritario”. No abandona la confrontación; la reubica.

Ese punto ayuda a entender por qué su historial de choques no le ha pasado, al menos todavía, una cuenta visible en el Congreso. “Hemos ido a tres audiencias, vamos a una cuarta”, dice, y asegura tener “excelente relación con todos los senadores”. Menciona incluso apoyos transversales en temas como el sanitario y buenas conversaciones con parlamentarias de oposición.

Al proyectar los primeros 90 días del Gobierno, dice que espera mostrar algo “físico”: “demoliciones de lugares que están abandonados”, “entregas de terrenos” a familias que llevan mucho esperando y “mejoramientos de entornos que están degradados”.

La pregunta que queda es cuánto durará esa ventaja cuando la instalación dé paso a la fricción más pesada de la gestión. ■